

PROTECCION JUDICIAL EFECTIVA DE LAS LIBERTADES*

Claudio Movilla Alvarez

Magistrado del Tribunal Supremo

Manuel María Zorrilla Ruiz

Catedrático de la Universidad de Deusto

La atribución al denominado *poder judicial* (tít. 6.º CE) de la defensa y promoción de los derechos y libertades establecidos en la ley fundamental del Estado social y democrático de Derecho (art. 1.1 CE), descansa en las reflexiones siguientes.

Conforme a la tradición profesada por el pensamiento iluminista el origen y la naturaleza de esas *situaciones innatas*, su fisonomía es la propia de los derechos y libertades que se reconocen en virtud de su inherencia a la existencia y condición humanas. No han sido otorgadas por actos arbitrarios o decisiones gratuitas de los poderes públicos. Todas las personas o solamente los ciudadanos —según el grado de cobertura constitucional— tienen la condición de sujetos titulares de ellos, al gozar de la utilidad o del provecho que es inseparable del interés legítimo contemplado por el Derecho objetivo (art. 10.1 y 53.1 CE).

Se ha superado la *fase incompleta o primaria*, que hizo de la *libertad material* una conquista que sucedía a la adquisición de la *libertad formal* y, en tal concepto, insuficiente del *Estado de derecho liberal burgués*. Ello no obstante, la *libertad material* —expuesta a las agresiones especialmente graves— sigue alejada todavía del *ideal libertario* que, según el propósito más ambicioso, invita y conduce al resultado de la *liberación integral* o plena emancipación de las servidumbres que aquejan a las personas y los grupos sociales.

La libertad así distinguida y reforzada es una *libertad real* —rasgo específico de la *libertad material* cuyo ejercicio se comprueba— y

* Texto bilingüe de la comunicación presentada en las jornadas que, bajo el rótulo *Encuentro Internacional sobre acceso a los Tribunales de Justicia*, han organizado en Trier (RFA), de 2 a 5 de noviembre de 1995, el Ministerio de Justicia de la República Federal de Alemania y la Academia Jurídica Europea.

efectiva, calificación que se añade a fin de destacar su finalidad liberadora. No puede hablarse de una *libertad exhaustiva* —informadora del dinamismo de los derechos y libertades susceptibles de protección oficial— si su ejercicio no produce simultáneamente el *efecto de transformación* que los poderes públicos, sin excepción, deben desencadenar y acrecentar.

Una importante precisión se sigue de todo. El legislador constituyente *ha reconocido* —importándolos de un cielo ético en el que vive en un estado de suspensión— los derechos y libertades que no necesitan de una experiencia o rodaje más intenso, porque el *consensus omnium* y la práctica civil no entorpecen la continuidad y normalidad de su goce. El constituyente ha tenido buen cuidado de añadir a este reconocimiento un soporte con el cual *garantiza* el elenco de derechos y libertades que pueden y deben alcanzar el más alto nivel de tutela. Objetivo que se consigue gracias a la *contribución transformadora de las acciones de liberación del poder judicial*.

Los derechos y las libertades —tanto si son fundamentales, como si les corresponde un rango inferior— que así se verifican y aseguran, tienen una vocación directa de protección judicial, ya que las normas de su formulación *vinculan, sin distinción ni privilegio, a los poderes públicos* (art. 53.1 CE).

Ninguna situación jurídica que apareje la mínima dosis de interés legítimo puede permanecer sustraída al control jurisdiccional de los episodios que la configuran. Principio expresado en la regla jurídica que el constituyente ha introducido y sumado a la lista de derechos fundados en la dignidad del ser personal y su eminencia sobre el resto de las cosas que pueblan el mundo. Trátase del derecho fundamental específico —no reducido a la cualidad de proclamación programática o secundaria (sec. 1.ª, cap. 2.º, tít. 1 CE)— de que *todas las personas tienen derecho a una efectiva tutela judicial* (art. 24.1 CE). Ahí se condensa el resultado de la *actuación jurisdiccional compuesta de la declaración del derecho y de la ejecución de la resolución judicial que se dicta con ese motivo* (art. 117.1 CE).

El derecho en cuestión adquiere una significación autónoma. Proviene de desgajar del cuerpo de todos los derechos constitucionalmente reconocidos la facultad —que, por naturaleza, les es inherente— de accionar ante los órdenes jurisdiccionales a fin de realizar la utilidad o provecho de que se trate. Se concibe como un derecho independiente de esta anexión al contenido esencial o *núcleo invulnerable* de cada derecho o libertad. La acción deja de ser un accesorio de uno u otra, y se convierte en un derecho *a la prestación de justicia*, matizado, es cierto, en función del grado de recepción constitucional de aquellas situaciones a que

su protección se destina. Protección que, a su vez, se configura como el derecho a conseguir una respuesta motivada y jurídicamente persuasiva respecto al problema de fondo debatido y acompañar las medidas cuyo objeto consiste en satisfacer la utilidad constitutiva del interés litigioso.

El Estado social y democrático de Derecho es deudor de la actividad requerida para disponer los medios personales y reales, y desplegar la organización necesaria para resolver cualesquiera conflictos que surjan en el seno de la vida social y entorpezcan la normalidad que se juzga indispensable para asegurar el respeto a la dignidad de la persona, la salvaguarda de sus derechos inviolables, el libre desarrollo y crecimiento de sí mismo, y también el respeto debido a la ley y los derechos ajenos (art. 10.1 CE).

Numerosas cuestiones que nunca se habían suscitado en el plano de la jurisdicción —debido a motivos de inercia histórica, e inexacta comprensión de su significado o de la dificultad técnica de construir un procedimiento satisfactorio— van, en adelante, a ser objeto del conocimiento y decisión por parte de los jueces ordinarios.

Lo que hoy se denomina *exceso de intervención judicial* en las relaciones públicas y privadas, no es otra cosa que la proyección sobre las realidades sociales de la novedad histórica del susodicho derecho fundamental. De ahí que la acción de la jurisdicción haya comenzado a extenderse —de hecho y de Derecho— en los diversos ámbitos que tradicionalmente se han visto sustraídos a su curiosidad y su pretensión de control. Ello era debido a que semejante posibilidad estaba obstada por dificultades de origen muy vario. Complejidad que incluía una cierta falta de celo y energía para embarcar al poder legislativo en la aventura de una *política de judicialización omnidireccional*, y la conciencia —dominante asimismo— que los poderes de hecho —temerosos de los peligros e inconvenientes de esta opción— rentan de que su inmunidad no iba a sufrir jamás una ofensiva judicial indeseable.

El incumplimiento de esta obligación legislativa no puede excusarse con la alegación de que es casi imposible una sana estructuración técnica del procedimiento que ha de llevar a la cobertura efectiva del derecho o la libertad de que se trate. Siquiera se haya subrayado que las reglas del reconocimiento del derecho a una protección judicial efectiva no tienen por qué constituir una excepción al principio general del efecto directo, cae de su peso que esta consecuencia resulta inaccesible si la legislación no cuida de atribuir la competencia judicial y señalar los cauces formales de planteamiento y desarrollo de la contradicción que nace del ejercicio de acciones judiciales.

Si estos deberes públicos no se cumplen por iniciativa del legislador, se está ante una hipótesis —ciertamente grave y lamentable— de

constitución en mora de dicho poder del Estado y de *inconstitucionalidad por omisión*. Se fija la presunción irrefragable de que el legislador cuenta con los medios precisos para cumplir tan importante papel y que le está vedado abstenerse de facilitar el bien jurídico que ello lleva consigo. De ahí que, a título complementario e instrumental, se contemple un *derecho de todos*, pronombre que incluye a las personas físicas, las personas morales, las uniones sin personalidad y las comunidades de individuos relativamente determinados. Derecho, también fundamental, *a un proceso con todas las garantías*, sin posibilidad jurídica de que el legislador oponga dificultades de implementación insuperables.

La satisfacción del referido derecho fundamental se subordina a la remoción de los obstáculos que, en el caso de mantenerse y subsistir, convierten esta novedad en un objeto inaccesible. Hay que suprimir los *obstáculos de naturaleza económica* y, para conseguir este objetivo, se establece que el acceso a la justicia será gratuito para todos aquellos que carezcan de medios suficientes para gozar de la protección que se innova (art. 119 CE). También hay que *asegurar a todos los grupos sociales* —cuya igualación se persigue— el acceso a la jurisdicción. Designio que se refleja en la atribución al Ministerio Público —que no por casualidad figura regulado bajo la rúbrica *Del poder judicial* (tít. VI CE)— de la función de accionar judicialmente para salvaguardar los intereses sociales específicos de cada una de las comunidades en que se integra el individuo (art. 9.2 CE).

La lucidez y clarividencia intelectual y moral del juez —protagonista del *esfuerzo transformador de liberación*— se asocian a la garantía sustancial de su independencia. Manifestación de la libertad, que debe reforzarse. Cualidad, pues, que —convertida en atributo conceptual de la función judicial— no es plena si no cuenta con un sistema de incompatibilidades. Toda incompatibilidad robustece y apoya la independencia judicial, pero no está pensada para causar una invasión innecesaria y desproporcionada en el campo de los derechos constitucionales que, en calidad de individuo y ciudadano, corresponden al juez (arts. 117.1 y 127.2 CE).

El rótulo de *Administración de Justicia* (art. 117.1 CE) no es la vestidura nominalista de la esencia del tercer poder del Estado, sino la *expresión sustancial* de un deber social de la jurisdicción, como es el de respetar —más allá de una concepción excesivamente formal y positivista del sistema de fuentes del Derecho— la justicia en cuanto valor superior del ordenamiento jurídico (art. 1.1 CE). La estructura y las funciones de este orden han resultado ser más complejas que las consagradas por la *posición normativista* que situaba la ley fundamental en el vértice del ordenamiento jurídico.

La acción judicial persigue la *garantía de cualquier derecho*. Surge, así las cosas, el problema de determinar si las obligaciones naturales han dejado de ser deberes desprovistos de acción en un sistema que confiere a la moralidad un alcance cuyas consecuencias pueden advertirse en el interior del ordenamiento jurídico. El derecho protegido por la jurisdicción es, sin duda, el que conoce una tutela específica y capaz de asegurar el goce de su contenido esencial. Es también el derecho que —privado de protección o insuficientemente protegido— debe ser contemplado por una decisión legislativa y enmarcado en el cuadro general de una tutela judicial que hasta entonces carecía de efectividad, porque el legislador no había desencadenado el dispositivo adecuado a ese fin (art. 117.4 CE).

El acceso a la protección del juez ordinario no puede rehusarse so pretexto de la dificultad técnico-jurídica de organizar el procedimiento que ha de contar *con todas las garantías* (art. 24.2 CE). Ciertamente se suscita el problema de la realización, a falta de esta infraestructura del efecto directo que debe acompañar a la aplicación de la norma jurídica en que figura formulado el derecho fundamental de que se trata (arts. 24.1 y 53.1 CE).

La efectividad de la garantía judicial no es incompatible con la idea de que el *conflicto* —sin más adjetivos— se ha convertido en la expresión de las más variadas realidades sociales y también constituye una condición inexcusable del crecimiento de la sociedad. La intervención judicial no se ha previsto para resolver todas las contradicciones del conflicto social general, sino solamente aquellas que desencadenan efectos perniciosos para la salvaguarda de los derechos constitucionales del individuo y los grupos sociales.

El poder judicial ha visto ampliado su compromiso constitucional, desde el momento en que ha tenido necesidad de corregir las consecuencias de la inacción legislativa. Al reconocer y sancionar el efecto directo y no meramente programático de todo el contenido del texto fundamental, la tutela judicial efectiva puede cumplir su papel sin subordinar la aplicación de las normas constitucionales a un desarrollo legislativo incierto y problemático (arts. 53.1 CE, 5.1 y 7.1 LOPJ).

Todos los derechos constitucionales están protegidos por la acción del poder judicial, aunque la intensidad de su tutela se concibe en función de su grado de reconocimiento. Un proceso con todas las garantías supone ciertamente el medio o vía ordinaria de dicha protección, si bien, en este punto, deben precisarse algunas singularidades.

Los derechos fundamentales y las libertades públicas gozan de una cobertura reforzada, ya que se ha establecido una vía procesal —de carácter acelerado y preferente— para proveer a situaciones de esta natu-

raleza. Los jueces ordinarios cumplen así la tarea de salvaguardar los principios y las normas constitucionales, cuya garantía no es un monopolio de su supremo intérprete. Tiene la obligación de conseguir una interpretación de la legalidad ordinaria que se acomode a las *líneas de fuerza* constitucionales. Si este menester de adaptación resulta imposible o muy forzado, los jueces deben plantear, ante la jurisdicción constitucional, una *cuestión de inconstitucionalidad* cuya respuesta permita conocer si una ley u otra norma jurídica de su mismo rango puede sobrevivir en el interior del ordenamiento jurídico o ha de ser expulsada del mismo (arts. 53.1 y 163 CE).

La aplicación que hace el juez ordinario de las reglas relativas a derechos y libertades obedece a la cláusula del *efecto directo*, característica de su contenido. Los jueces ordinarios no pueden, sin embargo, aplicar directamente los llamados *principios rectores de la política social y económica*, porque —aunque se le reconozca un alcance interpretativo—, se requiere siempre de un desarrollo legislativo que haga posible su aplicación (art. 53.3 y cap. 3.º, tít. I CE).

* * *

La mise a charge du nommé *pouvoir judiciaire* (tít. VI CE) de la défense et promotion des droits et libertés fixés dans la loi fondamentale de l'Etat démocratique et social de droit (art. 1.1 CE) repose sur les réflexions suivantes.

D'accord avec la tradition de la pensée illuministe sur l'origine et la nature de ces *situations innées*, elles ont toutes la physionomie de droits et libertés reconnus en vertu de son inhérence à l'existence et condition humaines. Elles n'ont pas été octroyées par un acte arbitraire ou une décision gratuite des pouvoirs publiques. Toutes les personnes ou seulement les citoyens —selon le degré de couverture constitutionnelle— deviennent des sujets titulaires, en jouissant de l'utilité ou le profit qui est inséparable de l'intérêt légitime visé par le droit objectif (arts. 10.1 y 53.1 CE).

On a dépassé la *phase incomplète ou primaire*, qui fait de la *liberté matérielle* une conquête qui succède à l'obtention de la *liberté formelle* et, à ce titre, insuffisante, du périmé *Etat de droit libéral et bourgeois*. Malgré tout, la *liberté matérielle* —exposée aux agressions les plus graves— est encore loin de l'*idéal libertaire* qui, selon le propos le plus ambitieux, invite et mène au résultat de la *libération intégrale* ou pleine émancipation des servitudes dont sont frappés les personnes et les groupes sociaux.

La liberté —ainsi distinguée et renforcée— est une *liberté réelle* —trait spécifique de la *liberté matérielle* dont l'actuation vient constatée— et *effective*, qualification qu'on ajoute afin de souligner son but libérateur. On ne peut pas parler d'une *liberté à part entière* —informatrice du dynamisme des droits et libertés agissables en justice— si son exercice ne déclenche pas *l'effet de transformation* que les pouvoirs publics, sans exception, sont tenus de produire et augmenter.

D'où, une précision très importante. Le législateur constituant *a reconnu* —en les prenant d'un *ciel étique* dans lequel vivent en état de suspension— les droits et libertés qui n'ont pas besoin d'un rouage plus intensif, parce que le *consensus omnium* et la pratique civile n'empêchent pas la continuité et la normalité de leur jouissance. Le constituant a eu bon soin d'ajouter à cette reconnaissance un support par lequel *a garanti* le faisceau de droits et libertés qui peuvent et doivent gagner le niveau le plus haut. But qu'on atteint grâce au *concours transformateur de l'action libératrice du pouvoir judiciaire*.

Les droits et les libertés —socient fondamentaux, soient d'un rang inférieur— qui ont été ainsi reconnus et assurés, comptent sur une vocation directe de protection judiciaire, parce que les règles de leur formulation *lient, sans distinction ni privilège, les pouvoirs publiques* (art. 53.1 CE).

Nulle situation juridique qui implique une dose minimale d'intérêt légitime, ne peut rester soustraite au contrôle juridictionnel des événements qui la touchent. Principe exprimé dans la règle juridique que le constituant a introduit dans la liste de droits fondés sur la dignité d'être personnel et son éminence sur le reste des choses qui peuplent le monde. C'est le droit fondamental spécifique —non réduite à la qualité de proclamation programmatique ou secondaire (sec. 1^{ère}, cap. 2^{ème}, tit. I CE)— que *toutes les personnes ont à une protection judiciaire effective* (art. 24.1 CE). Voie, bref, la résultat de l'actuation juridictionnelle, composée de la déclaration du droit et de l'exécution du jugement alors rendu (art. 117.1 CE).

Le droit en question acquiert un sens autonome. Il vient de dégager du corps de tous les droits constitutionnellement reconnus la faculté —qui leur était propre— d'agir en justice pour réaliser la respective utilité ou profit. Il est devenu un droit indépendant de cette anexion au contenu essentiel ou *noyau inviolable* de chaque droit ou liberté. L'action n'est plus un accessoire de chaque droit ou liberté, mais un droit à la prestation de justice, nuancé, c'est vrai, en fonction du degré de réception constitutionnelle des situations auxquelles sa protection est adressée. Protection dessinée comme le droit à réussir une réponse motivée et juridiquement persuasive sur le problème de fond débattu,

et aussi comme la mesure dont l'objet consiste à satisfaire l'utilité constitutive de l'intérêt en litige.

L'Etat démocratique de droit est débiteur de l'activité requise pour disposer les moyens personnels et réels, et pour déployer l'organisation dont on a besoin pour résoudre n'importe quel conflit émergeant au sein de la vie sociale et gênant la normalité qu'on juge indispensable pour assurer le respect de la dignité de la personne, la sauvegarde de ses droits inviolables, le libre épanouissement de soi-même et le respect aussi de la loi et les droits des autres (art. 10.1 CE).

De nombreuses questions qui n'avaient jamais été posées sur le plan de la juridiction —du à des motifs d'inertie historique, d'inexacte compréhension de son sens ou de la difficulté technique de construire une procédure satisfaisante— seront soumises dorénavant à la connaissance et décision des juges ordinaires.

Ce qui aujourd'hui reçoit le nom d'*exces de intervention judiciaire* dans les rapports publiques et privées, n'est que la projection sur les réalités de la nouveauté historique de l'incorporation du susdit droit fondamental. D'où que l'action de la juridiction ait commencé —de fait et de droit— à s'épanouir sur plusieurs domaines qui traditionnellement on voyait soustraits à sa curiosité et sa prétension de contrôle. Il était ainsi, parce qu'une telle possibilité restait empêchée par des difficultés d'origine très diverse. Complexité qui mêlait un certain manque de zèle et d'énergie pour embarquer le pouvoir législatif sur l'aventure d'une *politique de judicialisation omnidirectionnelle*, et la conscience —aussi triomphante— que les pouvoirs de fait —craigneux des perils et inconvénients de cette option— avaient que leur imminence ne souffrirait jamais d'une offensive juridictionnelle indésirable.

Le manquement de cette obligation législative ne peut pas s'excuser en alléguant qu'il est presque impossible une saine formation technique de la procédure qui mène à la couverture effective du droit ou de la liberté en question. Bien que —comme on a souligné— les règles de reconnaissance du droit à une protection judiciaire effective ne doivent pourquoi être une exception à la règle générale de l'effet direct, il va de soi que cette conséquence devient inaccessible si la législation n'a pas établi l'attribution de compétence judiciaire et la voie formelle de poser et développer la contradiction née de l'exercice de l'action en justice.

Si ces devoirs publics ne sont accomplis par l'initiative législative, on est devant un hypothèse —certainement grave et regrettable— de *mise en demeure* de ce pouvoir de l'Etat et *d'in constitutionnalité par omission*. On fixe la présomption irrefragable que le législateur dispose des moyens précis pour remplir un si important rôle et qu'il lui est

interdicit de refuser le bien juridique qu'il porte avec soi. D'où, qu'on vise, a titre complémentaire et instrumental, un *droit de tous*, prénom qui comprend les personnes physiques, les personnes morales, les unions sans personnalité et les communautés d'individus relativement déterminés. Droit, aussi fondamental, à un *procès fourni de toutes les garanties*, sans possibilité que le législateur oppose d'insurmontables difficultés d'implémentation (art. 24.2 CE).

La satisfaction du sudit droit fondamental est subordonnée à la remotion des obstacles qui, en cas de survivre, font de cette nouveauté quelque chose d'innaccessible.

Il faut supprimer les *obstacles de nature économique* et, pour atteindre ce but, on dispose que l'accès à la justice sera gratuit pour tous ceux qui n'ont pas de moyens suffisants pour jouir de la protection introduite (art. 119 CE).

Il faut aussi *assurer à tous les groupes sociaux* —dont l'égalisation est poursuite— l'accès à la juridiction. Dessein qu'on reflète dans l'attribution au Ministère Public —qui non par hasard est réglé sous la rubrique *Du pouvoir judiciaire* (tit. VI CE)— de la fonction d'agir en justice pour sauvegarder l'intérêt social, celui qui est spécifique de chacune des communautés dans lesquelles l'individu.

La lucidité et clairvoyance intellectuelle et morale du juge —protagoniste de *l'effort transformateur de libération*— sont liées à la garantie foncière de son indépendance. Manifestation de la liberté qui doit être renforcée. Qualité, donc, qui —devenue attribut conceptuel de la fonction judiciaire— ne devient pleine si elle ne compte pas sur un système d'incompatibilités. Toute incompatibilité soutient l'indépendance judiciaire, mais elle n'est pas appelée à causer une invasion innécessaire et faute de proportion dans le champ des droits constitutionnels du juge en tant qu'individu et citoyen (arts. 117.1 y 127.2 CE).

La nomination d'*Administration de Justice* (art. 117.1 CE) n'est pas le vêtement nominaliste de l'essentiel du troisième pouvoir de l'Etat, mais *l'expression substantielle* d'un devoir social de la juridiction, celui de respecter —au delà d'une conception trop formelle et positiviste du système des sources du droit— la justice comme une valeur supérieure de l'ordre juridique (art. 1.1 CE). La structure et les fonctions de cet ordre sont devenues plus complexes que celles consacrées par la *théorie normativiste*, qui plaçait la loi fondamentale au sommet de l'ordre juridique.

L'action judiciaire poursuit *la garantie de n'importe quel droit*. Le problème se pose ainsi de savoir si les obligations naturelles ne sont alors pas des devoirs dépourvus d'action dans un système qui donne à la moralité une portée dont les effets peuvent être aperçus à l'intérieur de

l'ordre juridique. Le droit protégé par la juridiction est, sans doute, celui qui connaît une tutelle spécifique et capable d'assurer la jouissance de son contenu essentiel. C'est aussi le droit qui —privé de protection ou insuffisamment protégé— doit être attendu par une décision législative et placé dans le cadre général d'une tutelle judiciaire qui, jusqu'alors, n'était pas effective, parce que le législateur n'avait pas déclenché le dispositif convenable à un tel but (art. 117.4 CE).

L'accès à la protection du juge ordinaire ne peut pas être refusé sous le prétexte de la difficulté technique d'organiser la procédure qui doit compter *sur toutes les garanties* (art. 24.2 CE). Certes, il se pose la question de réaliser, à défaut de cette infrastructure, l'effet direct qui doit accompagner l'application de la règle juridique dans laquelle est renfermé le droit fondamental dont il s'agit (arts. 24.1 y 53.1 CE).

L'effectivité de la garantie judiciaire n'est pas incompatible avec l'idée que le *conflict* —sans adjectifs— devienne une expression de plusieurs réalités sociales et aussi une condition inexcusable de croissance de la société. L'intervention judiciaire n'a pas été prévue pour résoudre toutes les contradictions du conflit social général, mais seulement celles qui produisent des conséquences nuisibles par la sauvegarde des droits constitutionnels de l'individu et des groupes sociaux.

Le pouvoir judiciaire a vu son engagement constitutionnel élargi, parce qu'il a eu besoin de corriger les conséquences de l'inaction législative. En reconnaissant l'effet direct et pas simplement programmeur de tout le contenu du texte fondamental, la protection judiciaire effective peut remplir son rôle sans subordonner l'application des normes constitutionnelles à l'incertain et problématique développement législatif (arts. 53.1 CE, 5.1 y 7.1 LOPJ).

Tous les droits constitutionnels sont protégés par l'action du pouvoir judiciaire, mais l'intensité de leur tutelle est conçue en fonction de leur degré de reconnaissance. Un procès avec toutes les garanties suppose le moyen ou la voie ordinaire de protection, mais certaines singularités doivent être soulignées à ce sujet.

Les droits fondamentaux et les libertés publiques jouissent d'une couverture renforcée, parce qu'on a fixé une voie de procédure —préférentielle et accélérée— d'attention des situations de cette nature. Les juges ordinaires remplissent aussi la tâche de sauvegarder les principes et les règles constitutionnelles, dont le garant n'est pas un monopole de son interprète suprême. Ils sont obligés de chercher une interprétation de la légalité ordinaire d'accord avec les *lignes de force* constitutionnelles. Si ce métier d'adaptation devient impossible ou trop forcée, ils doivent poser, devant la juridiction constitutionnelle, une *question d'inconstitutionnalité*, dont la réponse permette de connaître si une loi ou une autre règle

juridique avec la meme hierarchie peut survivre à l'intérieur de l'ordre juridique ou doit en être chassée (arts. 53.1 y 163 CE).

L'application par le juge ordinaire des règles sur des droits et des libertés, obéit à la clause de l'effet direct, spécifique de leur contenu. Mais les juges ordinaires n'ont pas le pouvoir d'appliquer directement les nommés *principes recteurs de la politique sociale et économique*, parce que —quoique ils aient une portée interprétative— on a toujours besoin d'un développement législatif pour les appliquer (art. 53.3 CE).

Abreviaturas y siglas

Art.	artículo
CE	Constitución española de 27.12.78
LOPJ	Ley Orgánica del Poder Judicial de 1.7.85
sec.	sección
tít.	título